



INFORME DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PCE

I.- Situación Internacional

El asalto al Capitolio estadounidense, instigado por Trump, ha sido el cierre de una presidencia marcada por la radicalización de la derecha norteamericana, años de mentiras y de incitación al odio, abusos de poder y policiales, políticas criminales respecto a las minorías y soberbia y arrogancia ante el resto del mundo.

El intento violento de paralizar el nombramiento de Biden como nuevo presidente del país ocupando el Congreso ha causado la muerte de cuatro personas, con Washington en estado de emergencia y el país inmerso en la catástrofe de la pandemia. La indudable responsabilidad de Trump en el asalto, su desdén y su trastornada agresividad, son reveladoras del carácter neofascista de su magistratura, de su falta de respeto a las normas constitucionales y de su inclinación a actos de fuerza para imponer su voluntad.

Los asaltantes del Capitolio, como muchos de los seguidores de Trump, son una mezcla de trabajadores blancos afectados por la globalización económica, de nacionalistas insatisfechos, de racistas partidarios de la segregación, de enloquecidos seguidores de QAnon, de ciudadanos temerosos de que la inmigración les arrebatase derechos y puestos de trabajo; una amalgama que también incluye a la extrema derecha, a matones de los Proud Boys, a portadores de banderas esclavistas, de evangelistas furiosos, de militantes de la Asociación Nacional del Rifle, a propietarios agrícolas, especuladores y la burguesía angustiada ante un nuevo mundo donde Estados Unidos no pueda imponer sus condiciones, y que globalmente componen buena parte de la población norteamericana.

La gravedad del ataque al Congreso va acompañada de una crisis en el Partido Republicano, fracturado por el ataque y por la deriva y el fanatismo del presidente saliente. Pero las semillas del odio, la intolerancia, y el fanatismo, están sembradas y han arraigado en millones de estadounidenses a la vez que se han expandido por el mundo dando alas a una nueva extrema derecha que consigue movilizar política y electoralmente a importantes sectores sociales. Una amenaza en general para la democracia y en particular para los proyectos de la izquierda transformadora en todo el mundo.

Estados Unidos contempla ahora las consecuencias de una política que ha aplicado durante décadas fuera de sus fronteras: las campañas de descrédito y manipulación contra los adversarios y el cuestionamiento de procesos electorales, negándose a reconocer triunfos en las urnas cuando no correspondían a sus intereses, y organizando golpes de Estado y operativos para derribar gobiernos legítimos.

La internacional de extrema derecha que se ha agrupado alrededor de Trump -Bolsonaro, Modi, Netanyahu, Orbán, Kaczyński, Salvini, Le Pen, Erdogan, Al-Sisi, Duterte, Vox en España, entre otros-, supone una amenaza para la libertad y la democracia y un riesgo para la convivencia. Son la expresión actualizada de las falanges fascistas y los escuadrones nazis que provocaron la mayor masacre de la historia de la humanidad y el régimen político más criminal que haya existido.

El PCE muestra su satisfacción por la definitiva salida de la Administración Trump, aunque mantiene sus dudas sobre la capacidad de que la Presidencia de Biden vaya a significar cambios profundos en la política exterior e interior de los EE. UU.

Mostramos nuestra solidaridad con las fuerzas políticas y sociales de los EE. UU. que se definen como socialistas, defendiendo políticas socialmente avanzadas y combatiendo sobre el terreno a las organizaciones racistas, violentas, de la extrema derecha estadounidense.

Simultáneamente, continuaremos trabajando para avanzar en procesos de convergencia internacional entre las fuerzas políticas y sociales de izquierdas para sumar fuerzas en la defensa de un nuevo orden internacional de carácter multipolar que ponga punto final a bloqueos ilegales que los EE. UU. mantienen contra los Estados que no se han sometido a sus intereses y que dispute la hegemonía a la internacional neofascista que Trump y sus aliados han dejado organizada.

No son previsibles grandes cambios en la política exterior norteamericana durante la administración Biden, sin perjuicio de giros tácticos en distintos conflictos actualmente abiertos en los que la acción exterior de Trump ha sido incapaz de alcanzar victorias políticas.

Continuará la obsesiva búsqueda de la "contención de China", el acoso a Rusia en el Este europeo, el Mar Negro y el Cáucaso, con la posible instalación de armamento nuclear en Polonia; y la inercia de las guerras iniciadas en Oriente Medio y en Libia, que siguen sin resolverse, además del persistente acoso a Cuba y Venezuela. Biden tiene también que afrontar el déficit comercial y fiscal, que van a seguir creciendo y que no va a poder resolver, por lo que no va a terminar con la guerra comercial iniciada en 2017 con China. Por su parte, Rusia no espera cambios relevantes con Biden: Lavrov ha calificado las actuales relaciones entre los dos países como las peores desde el fin de la *guerra fría* y no es previsible una mejora, visto que todos los conflictos políticos en los países europeos que no pertenecen a la UE responden a la política de la OTAN de acercar sus tropas hasta la frontera rusa.

La victoria de Maia Sandu en Moldavia, que fuerza la salida de Dodón de la presidencia, en unas elecciones celebradas bajo el boicot del influyente Partido Comunista, abre inquietantes hipótesis de futuro porque Sandu es proclive a reforzar lazos con Rumania, y la hipótesis de una unión entre los dos países puede encender de nuevo la guerra con las regiones de Transnistria y Gagauzia.

Se reactivan los conflictos en el Cáucaso. Parálisis del gobierno en Armenia: la población ha recibido la derrota militar ante Azerbaijón como una catástrofe nacional, e identifica al primer ministro Pashinián (partidario de la OTAN y proclive a Estados Unidos) con el papel de Yeltsin en la década de los noventa en la URSS; su debilidad esconde una paradoja: casi nadie lo apoya, pero nadie

quiere sustituirlo porque tendría que llevar a cabo la ejecución del acuerdo con Bakú y Moscú que implica la entrega de los territorios azeríes que Armenia retenía desde 1994, y que, sin embargo, no puede negarse a devolver. Moscú, el único aliado posible de Armenia, vuelve a desempeñar un papel preponderante, aunque quiere mantener también los lazos con Azerbaijón.

La UE se muestra parte activa de la actuación de presión de la OTAN a Rusia: Alemania, que ha presidido la Unión durante el segundo semestre de 2020, acusa a Moscú por su actuación sobre Crimea, Abjasia, Osetia del Sur, Moldavia (Transnistria), Ucrania, e incluso desliza sospechas, por boca de Heiko Maas (ministro del SPD en el gobierno Merkel) sobre el acuerdo en Nagorno-Karabaj auspiciado por Rusia entre Armenia y Azerbaijón. Maas mantiene que Biden "apuesta por la fuerza" en las relaciones con Moscú. Pese a ello, se ha culminado el tramo alemán del *Nord Stream 2* y solo falta el tramo danés para completarlo, que modificará el mapa europeo de la energía y limitará la llegada de gas natural licuado de Estados Unidos.

En el continente asiático, la situación continúa agravándose en Yemen, con millones de personas en una situación de hambruna desesperada. Arabia Saudí ha impuesto a sus aliados (el gobierno de Mansur al-Hadi y los secesionistas del Consejo Transitorio Sureño, CTS, a quienes apoyan los Emiratos Árabes Unidos, bandos que se enfrentaron militarmente en los meses anteriores) un acuerdo para formar un nuevo gobierno de unidad en Adén, mientras los hutíes continúan controlando la capital, Saná, y la guerra y la agresión saudita no se detienen.

La reactivación del terrorismo de Daesh en Siria muestra la realidad de la inconclusa guerra, y las dificultades del gobierno de Damasco para controlar todo el territorio, que junto a las nuevas sanciones norteamericanas (la Ley César) agravan la crisis económica en el país, algo que ha llevado a la ONU a pedir a Estados Unidos su levantamiento. En la India continúan las protestas de millones de personas contra las leyes agrícolas del gobierno de Modi, donde el Partido Comunista, en sus dos ramas, ha tenido una destacada actividad en la organización de las movilizaciones y en la huelga general, seguida por doscientos cincuenta millones de trabajadores.

En Nepal, el primer ministro Oli consiguió el acuerdo de la presidenta del país (ambos, miembros del Partido Comunista nepalí) para disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones. Existen fuertes divergencias en el seno del Partido Comunista entre Oli y Prachanda. China está trabajando en proyectos de desarrollo e infraestructuras, y en la trastienda, India trata de intervenir para mantener a Nepal en su área de influencia. Oli ha acusado a Delhi de intervencionismo en su país.

El terrorismo de Estado israelí ha culminado por el momento con el asesinato de uno de los más relevantes miembros del programa nuclear iraní, Mohsen Fajrizadeh, el quinto científico asesinado. La indudable autoría israelí perseguía tres objetivos: frenar el desarrollo del programa nuclear iraní, forzar con esa grave provocación a una respuesta militar a Teherán que, aunque fuera limitada podría abrir un escenario de guerra en la región si ataca a Israel, y dificultar el acercamiento de Estados Unidos. Biden afirmó durante la campaña electoral que regresaría al acuerdo 5+1, aunque al mismo tiempo persigue

detener el programa de misiles iraní que no está incluido en el 5+1, y el asesinato de Fajrizadeh va a complicar mucho las negociaciones.

El hundimiento del Líbano es un hecho; el presidente Aoun encargó en octubre a Saad Hariri la formación de nuevo gobierno, que no ha podido concretarse. Aoun ha pedido ayuda a la Liga Árabe, pero la situación en el país es catastrófica. En la vecina Turquía, se asiste al fortalecimiento del poder civil de Erdogan tras las duras condenas impuestas a los militares del fallido golpe de Estado de agosto de 2016, con un evidente desplazamiento a un régimen cesarista y dictatorial, que interviene con tropas y mercenarios en las guerras de Oriente Medio y el Magreb, Siria, Iraq, Libia, mientras se distancia de Estados Unidos, enarbolando una retórica otomana que persigue un nuevo y activo protagonismo en Oriente Medio, norte de África y cuerno de África.

Además de las presiones estadounidenses sobre la Junta Militar de Sudán, que han llevado a Jartum a establecer relaciones con Tel-Aviv, el encuentro entre Pompeo, Mohamed bin Salmán y Netanyahu revela la pretensión del gobierno norteamericano de incrementar el reconocimiento de Israel en el mundo islámico, política que augura nuevos problemas para el pueblo palestino, a la espera de hipotéticas decisiones de Biden. También Marruecos ha seguido sus pasos, reconociendo a Israel con la moneda de cambio del apoyo norteamericano a la anexión del Sáhara Occidental. La ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos con la consiguiente reanudación del enfrentamiento militar con el Frente Polisario, y el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, aumentan las dificultades que enfrentan tanto la RASD como el pueblo palestino.

Un asunto de enorme relevancia ha sido la firma del RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo, donde se integran China, la ASEAN, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, que suponen un 30 % de la economía mundial, con una población combinada de 2.200 millones de personas. Es la primera vez que Pekín y Tokio, dos de las tres primeras potencias económicas mundiales, suscriben un acuerdo de reducción arancelaria y de libre comercio. Falta por integrarse la India, que, aunque tiene la puerta abierta recela del potencial chino y se aproxima a Estados Unidos. El RCEP es una gran victoria para China, que mantuvo también la mano tendida de Xi Jinping en la cumbre de la APEC. Además, Pekín ha suscrito el Tratado de Inversiones con la Unión Europea, y trabaja en el desarrollo de un nuevo acuerdo trilateral con Seúl y Tokio.

Mejoran, cautelosamente, las relaciones entre Pekín y Tokio, tras la reunión de Wang Yi y el primer ministro Suga, que han decidido abrir una ronda de conversaciones para aumentar los intercambios y para asegurar la estabilidad regional: el acuerdo es relevante porque se da en el contexto del acoso norteamericano y las iniciativas militares del grupo QUAD. Suga parece orientarse hacia un equilibrio en las relaciones con Estados Unidos y China: está ligado a Washington por sus acuerdos militares, pero necesita a China para los intercambios y el desarrollo económico.

La respuesta norteamericana no se ha hecho esperar: el documento del Departamento de Estado (*The Elements of the China Challenge*) acusa a Pekín de hegemonismo, y recomienda fortalecer el ejército de Estados Unidos para que siga siendo el más poderoso del planeta, lo que implica una firme apuesta

por la militarización. Además, el Pentágono mostró su agresividad con los ejercicios militares *Malabar* en el Mar Arábigo, realizados por tropas de Estados Unidos, India, Japón y Australia, QUAD, con portaaviones y buques de guerra, incluido el *Nimitz*, que es el buque de guerra más grande del mundo, y la actividad norteamericana en Asia no es ajena a los ecos del enfrentamiento chino-indio en Ladakh y su propósito de “frenar el expansionismo chino en la región del Indo Pacífico”. También es relevante la tensión China-Australia, donde Canberra, siguiendo el guion de Washington, exige responsabilidades a Pekín por la Covid-19, y pretende vetar el 5G chino, junto a los nuevos acuerdos militares que refuerzan la apuesta norteamericana por el QUAD y la contención de China.

América recupera lentamente la bandera de los movimientos progresistas. En Venezuela, las elecciones parlamentarias han otorgado una aplastante victoria al PSUV y sus aliados. Cuba está soportando una nueva operación de acoso, auspiciada por Estados Unidos, con el llamado Movimiento San Isidro. También condenamos la decisión de la Administración Trump de incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, adoptada por el Gobierno de Donald Trump, a nueve días de abandonar la Casa Blanca. Esta decisión, anunciada por el actual Secretario de Estado, Mike Pompeo, revierte la tomada por Obama en el año 2015 quien retiró a Cuba de esa lista donde figuraba desde el año 1982. El anuncio de Pompeo que ocurre pocos días después del asalto al Capitolio alentado por Trump es una decisión totalmente arbitraria y unilateral que vulnera la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Exigimos una condena unánime de la comunidad internacional ante una decisión que no respeta los derechos fundamentales del pueblo cubano y que intenta ahondar en la herida del bloqueo económico mantenido por EE. UU.

Se agrava la crisis en Perú, donde las protestas por la Ley Agraria han sido reprimidas duramente por la policía, que ha matado a varios manifestantes. En Colombia continúa el acoso del gobierno uribista al acuerdo de paz y los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros. Ya son 252 los antiguos integrantes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

A reseñar, la victoria del movimiento a favor del derecho al aborto en Argentina. En Argentina, el pasado 30 de diciembre se ratificó en el senado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho humano de las mujeres que por el hecho de ejercerlo se criminaliza aún hoy a millones de mujeres en el mundo.

La ley argentina no es solo una victoria para las mujeres y el movimiento feminista que durante décadas han estado luchando y movilizándose sino también para las clases populares porque es reconocer que, en el contexto de Latinoamérica, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad.

La legalización del aborto voluntario en Argentina sigue empoderando las mujeres de la región de Latinoamérica y Caribe en la lucha por sus derechos. Al igual que fue Cuba en 1965 con la legalización del aborto y en 2012 por el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay.

África asiste a la guerra en el Tigré etíope, y al avance de los rebeldes en República Centroafricana, contrarios al presidente Touadéra, que se acercan a

Bangui. Rusia ha enviado ayuda militar y trescientos instructores para asistir al gobierno, y continúa el lento recuento de los votos de las elecciones del 27 de diciembre. China es el país que más está ayudando a África en la lucha contra la pandemia, hecho que ha reconocido la Unión Europea.

Aunque no podemos esperar nada de Biden, la salida de Trump de la presidencia norteamericana es una magnífica noticia porque esa internacional de extrema derecha que se había configurado con él pierde a su principal referente y actor más poderoso. Sin embargo, el peligro del neofascismo y de la extrema derecha en el mundo continúa muy presente: la propuesta rusa de una resolución condenando la glorificación del nazismo fue aprobada por la Asamblea General de la ONU por una gran mayoría. Solo dos países votaron en contra: Estados Unidos y Ucrania. Pero resultado vergonzosa y aun no explicada debidamente la abstención de los países de la Unión Europea.

II.- La Unión Europea afronta un complicado futuro: la reducción de su peso económico y político con la culminación del Brexit, y la hipótesis de futuros abandonos de otros países, junto a la difícil corresponsabilidad de los gobiernos nacionales, el escandaloso déficit democrático, y la paralización de cualquier iniciativa orientada a un horizonte federal o confederal, sin que, además, a la moneda única se añada una fiscalidad unitaria, una unión bancaria y un proyecto real de avance hacia la unión política. El agravamiento de la crisis económica causada por la pandemia precisará la movilización de ingentes recursos económicos, y aunque la retirada del veto húngaro y polaco a los recursos para combatir la pandemia sea una buena noticia, el actual fondo de reconstrucción aprobado probablemente no va a ser suficiente para superar la destrucción de estructura productiva y evitar el riesgo de desmantelamiento de servicios públicos al que se va a enfrentar la Unión Europea. El rechazo de los países mediterráneos (con la excepción de Francia) al Pacto migratorio propuesto por la Comisión Europea, también ahonda en la situación de crisis de la Unión Europea.

En este contexto, la firma del Acuerdo de Inversiones de la Unión Europea con China, que se negociaba desde 2014, es una buena noticia, que contribuye al multilateralismo y la distensión. No se puede obviar que Xi Jinping llamó a una mayor colaboración en el esfuerzo por la conservación ecológica.

En los próximos meses la batalla política a la que nos enfrentaremos será definir los criterios con los que España utilizará los fondos para la reconstrucción recibidos desde la Unión Europea. Bajo la conceptualización de transición ecológica y digitalización de la economía se abren diversas posibilidades que ocasionarán una dura pugna entre el gran capital, por una parte, los distintos lobbies empresariales, y las administraciones públicas. En esta pugna las fuerzas políticas de izquierda y en especial nuestro Partido tendremos que intervenir para conseguir que esos fondos permitan por una parte reforzar los servicios públicos y por otra parte posibiliten una reindustrialización de nuestro país en las líneas estratégicas que se abren para la aplicación de estos fondos, cómo son la puesta en marcha de iniciativas industriales de producción de bienes de equipos relacionados con la producción energética no contaminante, la investigación, desarrollo y la innovación tecnológica, y el desarrollo de la industria electrónica, informática y biotecnológica; acompañadas de medidas

disruptivas que contemplen otros factores como la ecología, la digitalización y la igualdad. Esta reconstrucción industrial debe de servir de palanca para el desarrollo, la transformación del modelo, el impulso al medio rural, la creación de empleo de calidad y la fijación de población. Potenciar la industria agroalimentaria, como herramienta para la diversificación económica y mantener el valor añadido que genera la transformación y distribución. Nuestro partido debe impulsar un amplio debate tanto en Izquierda Unida como en el espacio de Unidas Podemos que permita poner en marcha con rapidez los equipos de expertos necesarios para definir las propuestas que necesariamente deberán llevarse al Consejo de Ministros, propuestas que debemos elaborar en coordinación con los sindicatos y sectores empresariales confrontados con los grandes oligopolios y multinacionales y que puedan convertirse en nuestros aliados en la consecución de estos mismos objetivos. Nuestro objetivo estratégico ante este reto será intentar poner en marcha un sector industrial público y con alto contenido de implicación y participación de la economía social. Sin duda estamos ante una oportunidad para recuperar el tiempo perdido por España para la puesta en marcha de un sector industrial modernizado y abandonar definitivamente nuestro papel de país europeo dedicado preferentemente a los sectores primarios, servicios turísticos y bancarios que nos había sido adjudicado desde que ingresamos en la Unión Europea.

III.- La continuación de la desestabilización por la ultraderecha

La ultraderecha continúa trabajando políticamente para identificarse como una fuerza de ruptura política capaz de solventar los problemas de las clases trabajadoras. Es un guion repetido en distintos momentos históricos cuando las oligarquías necesitan generar propuestas y discursos políticos que impidan que la clase trabajadora se organice para acabar con el sistema capitalista. Por ello, el avance de la ultraderecha y el fascismo muestran el fracaso de las organizaciones obreras para generar hegemonía política y poner en marcha una alternativa al sistema.

Desde julio de 2018 hasta hoy se han conocido al menos seis cartas o manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático y pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una "situación política inaceptable", eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos.

El más masivo de estos manifiestos, publicado el pasado 3 de diciembre, aparece firmado por más de 270 militares en retiro que llaman a "revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y proetarras". Al mismo tiempo, sale a la luz pública un chat de militares retirados en el que un general defiende fusilar a 26 millones de españoles, a los que denomina "hijos de puta". Tras la tardía y tenue reacción de la Ministra de Defensa criticando estas acciones de militares retirados el pasado día 6 de enero, el teniente general retirado Pérez Alamán, promotor del manifiesto de diciembre se ha atrevido a replicar a la ministra reiterando las declaraciones amenazadoras al gobierno.

El Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una operación de desestabilización de la democracia, en primer lugar, para impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora para atacar al gobierno de coalición, puesta en marcha tan pronto se aprobó la investidura como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. La declaración del Estado de Alarma por la pandemia ha sido utilizada para incrementar los ataques desestabilizadores por cualquier medio.

No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política, económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo militares, sino institucionales, económicos y sociales, cuyo objetivo es acabar con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado.

Sin duda la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye una grave amenaza, aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores antidemocráticos, pero trabajan activamente para serlo.

La estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha.

Para abordar esta situación y desarticular las estrategias desestabilizadoras de la extrema derecha y sus aliados, es necesario abordar de una vez la asignatura pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de mecanismos que permitan que la realización de declaraciones o actividades desestabilizadoras y contrarias al orden constitucional puedan ser sancionadas cuando se realizan por militares que, aunque estén en retiro, utilicen para desplegar esa actividad su antigua condición. La justicia militar debe ser competente exclusivamente para conocer los casos relacionados con el servicio, en ningún caso respecto a actividades con implicaciones fuera de las FFAA. Es imprescindible reformar el acceso a las academias militares, de Guardia Civil y de Policía Nacional, así como objetivar al máximo los procedimientos de ascensos, acceso a cursos de formación y renovaciones de contratos de tropa y marinería, así como oficiales de complemento, garantizando la participación en las evaluaciones de funcionarios externos a las FFAA y FCSE.

El PCE defenderá el reconocimiento de los derechos democráticos y sindicales en las FFAA, para fortalecer las asociaciones y colectivos, tratando de vincularlos a los sindicatos preexistentes, reformando las distintas leyes orgánicas que limitan el derecho de asociación y sindicación. En esta misma línea de mejora de los derechos laborales de los militares, debe solucionarse el problema de los despidos a la tropa y militares de complemento que cumplen 45 años.

IV. La situación de la Pandemia

Ya fuera a consecuencia de las navidades y las celebraciones de estas fechas o por la relajación de las medidas adoptadas por las distintas administraciones -o por ambos motivos- lo cierto es que desde que la administración central transfirió a las comunidades autónomas la decisión sobre las medidas a adoptar en cada territorio para hacer frente a la pandemia nos hemos encontrado bien con un incremento de los contagios de la segunda ola o bien ante la llegada de una tercera ola. En todo caso, estamos ante una subida sumamente preocupante de la incidencia del COVID-19 y su consecuente afectación a la situación económica con la agudización de la crisis social y laboral.

El Partido Comunista de España hace un llamamiento a la responsabilidad tanto a las autoridades en sus distintos niveles de competencia, como del conjunto de las personas para conseguir entre todas la disminución y doblamiento de la segunda ola y la evitación de la llegada de una potencial tercera ola de la pandemia.

En un entorno europeo en el que los fallecidos de la segunda ola han superado a los de la primera, se evidencia que no se ha producido una adecuada combinación de medidas y que debemos de reclamar seguir poniendo la vida de las personas por delante de intereses económicos cortoplacistas, y buscar elementos de coordinación internacional y dentro de los países para luchar con las medidas que han demostrado ser más efectivas y eficientes.

La llegada de vacunas no puede hacernos perder la perspectiva de que no todo el mundo podrá vacunarse en la primera fase de vacunación. La vacunación en nuestro país se va a sustentar sobre la red de Atención Primaria, por ello este estamento asistencial deberá reforzarse con fondos finalistas de forma innegociable, no sólo para asegurar el éxito de la futura campaña de vacunación, sino para seguir siendo la línea de atención y puerta más cercana de atención a los pacientes no COVID, cuya morbimortalidad se ha visto afectada por el efecto de la saturación del sistema debida a la COVID. La marcha de las campañas de vacunación en estos momentos se encuentra muy lejos de los objetivos trazados con una muy baja incidencia todavía sin duda alguna debido al debilitamiento de los sistemas de atención primaria en toda España. Aun así, hay evidentes diferencias entre la puesta en marcha de las campañas de vacunación por unas y otras comunidades autónomas. Asturias se encuentra la cabeza del número de dosis utilizadas por habitantes, mientras que la Comunidad de Madrid se encuentra en el último puesto en toda España.

Además, e insistiendo en que la vacuna no podrá llegar a toda la población en la primera fase de vacunación, la inmunización comunitaria llegará hasta una cobertura eficiente entre el 60 y 80%. Por lo tanto, habrá que combinar la distribución de las vacunas con otras medidas de distanciamiento físico, prevención personal, (uso de mascarillas) y de higiene adecuada, (lavado frecuente de manos, ventilación en entornos cerrados). Para asegurar dichas coberturas, las campañas de vacunación responsabilidad de las Comunidades Autónomas deberán incrementarse además de complementarse con adecuadas campañas de información y educación sanitaria que enfrente el miedo e inseguridad promovido desde grupúsculos antivacunas, negacionistas etc.

El uso de los fondos y riqueza del país, ha de usarse de forma eficiente y finalista para el conjunto de la población, no tiene sentido la realización de test masivos

de antígenos que tienen una sensibilidad alejada de las PCR y un alto riesgo de falsos negativos en grupos poblacionales como profesores o en programas de streaming en barrios con fines estigmatizadores donde el bajísimo número de detección de positivos hace que los recursos se malgasten y no se dediquen por ejemplo a reforzar las plantillas de profesionales sanitarios de dichos barrios. Dejar que se siga invirtiendo en construcciones sanitarias, mientras a pocos kilómetros se tiene un hospital vacío o torres hospitalarias no utilizadas es una irresponsabilidad que cuesta vidas. Los fondos han de ir dirigidos a salvar a las personas por delante de cualquier otro criterio, si no estaremos dejando que los criterios del capitalismo de poner por delante ganancias y macroeconomía por delante de las personas logren objetivos especulativos, especulen y se lucren con el sufrimiento de la mayoría.

En cambio, la realización de cribados masivos a trabajadores de primera línea y actividades esenciales como los sectores de trabajo sanitario y sociosanitario, comercio, alimentación y personas de mayor riesgo como empleados de transportes públicos e integrantes de cuerpo de seguridad, asegurarán una adecuada lucha contra el virus y un uso eficiente de los recursos de todos en interés de todos.

Por lo tanto, el PCE debe trabajar para garantizar allí donde podamos la priorización de atención sanitaria, y el uso de recursos como las vacunas basados en criterios científicos y clínicos: Nivel de morbilidad grave y mortalidad, grupos de población de mayor riesgo, grado de exposición a la enfermedad, impacto social y equidad de la atención, foco en la vigilancia, seguimiento y tratamientos orientado a disminuir la transmisibilidad de la enfermedad.

Tanto para atajar la pandemia como para prevenir una tercera ola, defendemos a la hora de decidir las medidas más adecuadas a adoptar, el desarrollo y mantenimiento de criterios homogéneos basados en la evidencia científica al margen de otros tipos de condicionamientos. Defendemos la adopción de medidas contundentes, tanto por parte de las CCAA como por parte del Gobierno central, para aumentar la limitación de actividades sociales o laborales de forma adecuada para evitar la propagación de la epidemia, medidas de endurecimiento de los periodos diarios de confinamiento y limitación de la actividad económica no esencial, en especial las actividades que incrementan el riesgo de contagios.

Creemos necesario que las distintas organizaciones del PCE -directamente y a través de Izquierda Unida y Unidas Podemos- ejerzan el control necesario sobre los fondos transferidos por el gobierno central a las administraciones autonómicas y locales para combatir la pandemia y mantener el escudo social, tanto para garantizar que dichos fondos se utilizan de formas adecuada como para detectar las deficiencias en inversiones públicas o sociales necesarias para garantizar los derechos y la atención a la clase trabajadora en todos los territorios del Estado durante la pandemia.

Trabajaremos también para que las medidas aprobadas y que forman parte del denominado escudo social, se expliquen y difundan adecuadamente entre todo nuestro pueblo, para evitar la permanente descalificación a la acción de este gobierno -y en especial de los ministerios dirigidos por compañeras y compañeros de UP- que se difunde desde los medios de comunicación controlados por la derecha.

V.- La reforma laboral y la defensa del sistema de pensiones

La puesta en marcha de las medidas previstas en el acuerdo de Gobierno de coalición para dejar sin efecto la reforma laboral aprobada por los anteriores gobiernos o para conseguir la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio en nuestro país, está encontrando como era previsible grandes resistencias por parte de los sectores empresariales y la derecha política. A pesar de que en el año 2020 conseguimos aprobar una subida del salario mínimo por encima del 20% lo cierto es que en este momento tanto el Partido Socialista como la CEOE se oponen radicalmente a una nueva subida, aunque fuera únicamente del IPC acumulado o incluso se oponen a una subida del 0,9% del SMI, como han venido defendiendo el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Cada día es más evidente la intervención del área económica del Gobierno en defensa de los intereses de los grandes grupos empresariales y confrontando con las propuestas de Unidas Podemos, en especial con las relacionadas con el mundo del trabajo, excediéndose mucho en las competencias de dicha área económica encabezado por la vicepresidenta Nadia Calviño. Tras un fin de año en el que la polémica por la subida del salario mínimo interprofesional ha sido permanente, de momento esa batalla no ha sido posible ganarla y únicamente se ha conseguido aplazar la decisión definitiva hasta dentro de unos meses cuando ya esté iniciado el nuevo curso político.

Respecto a las medidas de desmantelamiento de las reformas laborales la batalla ya ha comenzado con el debate en torno a la regulación de las denominadas plataformas de raiders, es decir la introducción de una regulación laboral expresa respecto a los repartidores. Como es conocido, en los últimos meses la Inspección de Trabajo viene impulsando procedimientos sancionadores que conjugados con distintas sentencias emitidas por tribunales laborales, han ido abriendo el escenario de una regulación del sector con pleno reconocimiento de derechos laborales, ámbito en el que ha sido más fácil avanzar debido a los propios intereses de algunos grupos empresariales dedicados al transporte que veían en las empresas de raiders una evidente competencia desleal.

Sin embargo, las medidas para la recuperación de la negociación colectiva y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, así como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, están demorando en ser adoptadas debido a la coordinación entre la CEOE y determinados sectores del Gobierno que se refieren en el área económica. Junto a ello es necesario avanzar en la regulación de la subcontratación laboral, art 42 ET, y la simplificación de los modelos de contratación conforme a la propuesta del Ministerio de trabajo de reducirlos a tres: un contrato de trabajo indefinido, otro contrato de formación o prácticas y otro contrato temporal, de carácter excepcional y con una regulación expresa de la causalidad que resulte absolutamente objetiva y clara, que haga de la contratación temporal la excepción y no la regla en España. Debemos destacar que la actitud de los sindicatos ha sido de coordinación absoluta con el Ministerio de Trabajo y por lo tanto con las posiciones políticas del espacio de Unidas Podemos. Sin embargo, el bloqueo está siendo evidente con la excusa de la agudización de la pandemia y la situación económica de las empresas obviando que la política

de ERTES puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo ha permitido el mantenimiento de prácticamente 800.000 puestos de trabajo que de otra forma se habrían perdido en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Elio perdemos de vista que las altas tasas de temporalidad En España han sido la principal causa de que el desempleo se haya disparado desde el inicio de la pandemia hasta encontrarnos con cifras cercanas a los cuatro millones de desempleados a pesar del esfuerzo hecho con la puesta en marcha de los ERTES.

El Partido Comunista de España debe contribuir a organizar las movilizaciones sindicales y en general de las personas trabajadoras, junto con todos los sectores organizados de la sociedad que seamos capaces de sumar a estas movilizaciones. Nuestra tarea debe ser que tanto Izquierda Unida como el espacio de Unidas Podemos trabajen, junto a los sindicatos para que nuestro pueblo y en especial la clase trabajadora, reivindique en las calles la puesta en marcha de una reforma laboral y la continuidad en la subida del SMI. Es conveniente que estos objetivos se alcancen mediante un gran acuerdo social entre el Gobierno los sindicatos y las organizaciones empresariales, pero en caso de que no sea así en un breve tiempo deberá imponerse los acuerdos programáticos del Gobierno de coalición y aprobar lo más pronto posible las medidas antes indicadas. Para ello es imprescindible que desde todo el espacio de Unidas Podemos, en especial desde Izquierda Unida, y en todo el territorio del Estado, se coordine con las organizaciones sindicales para poner en marcha a la mayor brevedad estas movilizaciones que deberían iniciarse durante el mes de enero En caso de no alcanzarse un acuerdo inmediato en la mesa de negociación social. Nuestro convencimiento es que, en la actual situación de correlación de fuerzas políticas, únicamente la organización de amplias movilizaciones sindicales puede permitir que se resuelva a nuestro favor la pugna a para aprobar las medidas que dejen sin efecto las reformas laborales de los gobiernos neoliberales y continúen el incremento del SMI.

También se ha abierto en las últimas semanas una nueva pugna en el seno del Consejo de Ministros debido a los anuncios unilaterales del ministro Escrivá de poner en marcha una reforma del sistema de pensiones que incremente los años de cotización para poder acceder a la pensión máxima de jubilación, así como la imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación. Medidas todas ellas que además de ser claramente perjudiciales para la clase trabajadora de nuestro país no se encuentran contempladas entre las 22 recomendaciones alcanzadas por el Pacto de Toledo en el Congreso en el mes de noviembre De hecho entre esas 22 recomendaciones, y aunque algunas de éstas eran cuestionadas por nuestro partido, lo más destacable era que se habían eliminado los denominados factores de sostenibilidad que propiciaban la ampliación del periodo laboral en activo para poder acceder a las pensiones máximas, así como se limitaban los años de cómputo de las cotizaciones para que no pudiera calcularse La cuantía definitiva de la pensión de jubilación sobre los años con cotizaciones más bajas del trabajador o la trabajadora.

Estas declaraciones del ministro de Inclusión se producen con la supuesta excusa de que es una exigencia de la Unión Europea cuando en absoluto consta que sea así. En todo caso han provocado entusiasmo nuevamente en el área económica del Gobierno, pero a la vez un gran enfado por supuesto entre los sindicatos, pero también entre determinados sectores vinculados al Partido

Socialista que habían participado en la construcción definitiva de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo. En este contexto confrontar con los hasta ahora "globos sonda de opinión" lanzados por el ministro Escrivá es también un objetivo de trabajo de nuestro Partido y de Izquierda Unida en coordinación con el espacio de Unidas Podemos y especialmente en coordinación con los sindicatos, que desde el primer momento se han manifestado claramente indignados con estas declaraciones que han sido entendidas como una auténtica provocación por emitirse apenas unos días después de cerrarse un complejo proceso de construcción de los acuerdos del Pacto de Toledo. No olvidemos que este proceso ha durado cuatro años.

VI.- La exitosa estrategia de aprobación de los PGE

En los últimos seis meses han sido numerosos los debates que hemos mantenido en el Partido, en Izquierda Unida y en el espacio Unidas Podemos respecto a la estrategia más adecuada para conseguir la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado expansivos que permitieran llevar adelante las medidas contenidas en el acuerdo de coalición y fundamentalmente que dejarán atrás los presupuestos de la austeridad y los recortes del ministro Montoro, presupuestos prorrogados en los últimos años y todavía en vigencia. Hemos tenido que enfrentarnos a intentos por parte del Partido Socialista de incorporar a Ciudadanos al bloque de apoyo político al Gobierno de coalición, una opción que complicaba desde nuestro punto de vista la viabilidad y el mantenimiento del Gobierno de coalición toda vez que alejaba las posibilidades de participación de las fuerzas de la izquierda nacionalista especialmente las fuerzas catalanas como Esquerra Republicana de Catalunya, a la vez que suponía un reforzamiento de los sectores neoliberales del Partido Socialista y hacía muy difícil el mantenimiento del acuerdo de coalición. Por dicho motivo desde el primer momento Unidas Podemos ha llevado adelante un trabajo de confrontación política frente a esta posibilidad de incorporación de Ciudadanos al bloque de gobernabilidad, siendo conscientes que para evitarlo era necesario ampliar el apoyo estable al gobierno de coalición con la imprescindible vinculación de Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya y otras fuerzas de izquierda con menos representación, pero importantes. Mas sencillo resultaba estabilizar el apoyo por parte del Partido Nacionalista Vasco.

El PCE se ha manifestado desde el inicio de este debate a favor de la estrategia de exclusión de ciudadanos del pacto de gobernabilidad, aunque ello a veces ha supuesto incluso cierto debate con las organizaciones sindicales que en un primer momento optaban por priorizar el cierre de cualquier pacto político que permitiera la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Finalmente, este objetivo ha sido alcanzado si bien para ello hemos tenido que mantener innumerables discusiones públicas y confrontaciones con nuestro socio de Gobierno. El resultado ha sido positivo toda vez que hemos ampliado la mayoría de apoyo al Gobierno y a la vez hemos aprobado unos presupuestos que como analizamos en el último informe de nuestra Comisión Política y en nuestro último Comité Central, incorporan partidas de clara expansión del gasto público para el mantenimiento del escudo social. De esta manera la viabilidad del Gobierno de coalición en torno al acuerdo programático alcanzado en su

momento está hoy más garantizada. Nuestro Partido debe felicitarse porque la estrategia política por la que hemos optado ha ido dando buenos resultados, si bien es cierto que para ello ha sido necesario mantener permanentemente una confrontación y debate político en el seno del Gobierno que a la vez hemos hecho compatible con mantener la cohesión del Gobierno hacia el exterior frente a las agresiones de la derecha extrema y la ultraderecha.

No podemos obviar que una vez conseguida estabilizar un amplio bloque de apoyos parlamentarios al Gobierno de coalición, con ocasión del posterior debate sobre la ley de eutanasia hemos podido incluso ampliar la mayoría parlamentaria para la aprobación de una ley tan importante como esta, aprobada con una brutal opción de la iglesia, la ultraderecha y la derecha más extrema y que significa el nacimiento de un nuevo derecho. Hemos conseguido sumar prácticamente hasta 200 votos parlamentarios, incluidos los de Ciudadanos, pero sin tener que realizar ninguna negociación con esta fuerza política y por tanto evitando darles cualquier posición protagonista o capacidad de determinar la línea política del Gobierno.

VII.- El mantenimiento y extensión del escudo social

El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un decreto que incluye dos medidas fundamentales para las familias: la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de los cortes de suministros hasta el final del estado de alarma. Se suspenden de esta forma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler y también se suspenden los desahucios de familias vulnerables con menores, personas dependientes y víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes tenedores -bancos, fondos de inversión y propietarios de más de 10 viviendas- aunque no tengan título habilitante. En todos los casos, para poder ejecutar un desahucio de una persona o familia vulnerable, las CCAA tendrán que ofrecer obligatoriamente una alternativa habitacional, que no podrá ser un albergue o un polideportivo, sino una vivienda digna.

También han quedado prohibidos los cortes de luz, agua y gas natural para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, durante el estado de alarma, mediada que se aplicará a los titulares del contrato y a aquellas personas que no puedan demostrar la titularidad pero que reúnan los requisitos de vulnerabilidad

No cabe duda de que está resultando difícil la ampliación y el mantenimiento de un Escudo Social sólido, como hemos tenido ocasión de ver en torno al debate y las discusiones para mejorar el ingreso mínimo vital. En todo caso esta medida, aunque no es la que nos habría gustado aprobar y sin duda es manifiestamente mejorable – por ejemplo, son cuestionables las compensaciones a los propietarios – es un paso más para ayudar a que miles de familias puedan pasar este invierno con algo más de seguridad y de dignidad. Su aprobación nuevamente ha sido posible debido al empeño y la presión realizada desde el espacio Unidas Podemos para avanzar hacia el fin de los desahucios sin alternativa y también de los cortes de suministros a personas vulnerables. La tarea ahora es conseguir que los movimientos sociales

que defienden el derecho a la vivienda digna la hagan suya y contribuyan a mejorarla tanto durante el estado de alarma como para conseguir que se mantenga una vez finalizado este.

VIII.- Se inicia el año del centenario del PCE. Una oportunidad para el reforzamiento y la visibilización del partido. El 6 de febrero se celebrará el acto público con el que se da comienzo el programa de actividades. Las limitaciones de movilidad y aforo impiden realizarlo en un formato presencial, lo que nos impone un esfuerzo redoblado para que sea un éxito y tenga el mayor impacto posible. A partir de esta fecha se iniciará la programación territorial. Es importante que tengamos en cuenta las indicaciones y los materiales que ha preparado la comisión preparatoria del centenario y la secretaria de comunicación, con la finalidad de llegar con más fuerza y eficacia al conjunto de la sociedad. El proyecto de documental ha tenido una gran acogida, superándose en pocas semanas la previsión de recaudación, lo que prueba el interés y el potencial de la celebración. Las condiciones difíciles que estamos viviendo nos obligan a utilizar fórmulas telemáticas mientras las actuales circunstancias se mantengan, lo que no debe ser un obstáculo para trabajar en todas las actividades programadas.

IX.- Apoyo del PCE a la candidatura mayoritaria asamblea IU

En apenas tres meses se realizará la asamblea federal de Izquierda Unida donde debatiremos entorno al papel de este movimiento político y social en los próximos años, respecto a su funcionamiento, y por supuesto respecto a su contribución a fortalecer y extender el espacio de Unidas Podemos como un espacio político estable y participativo.

A estas alturas ya se ha anunciado que al menos dos candidaturas concurrirán en esta asamblea federal. Nuestro Partido desde hace tiempo viene trabajando dentro de la dirección federal de Izquierda Unida para garantizar que nuestras propuestas y nuestra visión de este movimiento político y social son hegemónicas en la próxima asamblea federal. No cabe duda de que nuestra tarea es apoyar la candidatura en la que nuestro Partido estará representado qué será sin duda alguna la mayoritaria encabezada por el actual coordinador federal Alberto Garzón.

Al Partido le corresponde elegir una delegación de 69 personas. Proponemos que una vez finalizado el proceso en las federaciones de IU acordemos dicha delegación incluyendo a los miembros del CC que no hayan sido elegidos/as en sus organizaciones completándola, si fuese necesario, con las/os camaradas que las organizaciones territoriales indiquen. Se propone asimismo que el CC delegue en la Comisión Política la aprobación definitiva de dicha delegación.

Madrid, 15 de enero de 2021